

EXC. 13-X-88, p. 1A

En Problemas, los Sistemas Autoritarios de AL

Disminución de la Legitimidad

- ★ En Desarrollo Político, ¿Dónde se Encuentra México?
- ★ Dramático Encuentro de los Chilenos con las Urnas
- ★ Ambos Enfrentaron al Electorado en Condición Similar

LORENZO MEYER

NUEVA YORK, 12 de octubre.—Ningún sistema de gobierno puede reproducirse con estabilidad y éxito sin una dosis adecuada de legitimidad, es decir, sin una condición de valuación positiva de las instituciones políticas y de los gobernantes por parte de la mayoría de los gobernados. Hoy, todos los sistemas autoritarios latinoamericanos, incluido el mexicano, se enfrentan a un problema de disminución alarmante en su legitimidad. A la larga, esta legitimidad resulta insustituible como el fluido que hace funcionar la pesada maquinaria de un gobierno moderno. Aunque etérea, la legitimidad resulta, en realidad, más fuerte para la protección de un gobierno que los aceros de cualquier ejército y sin ella es difícil, y finalmente imposible, sostenerse en el poder, así se tenga el apoyo de aparatos armados, burocráticos o corporativos formidables.

Se dice que las comparaciones son odiosas, pero no hay manera de evitarlas. Después de todo, la única manera de saber quiénes somos —ya sea como individuos o como colectividad— es mediante la comparación explícita o implícita con los otros. Es por ello

Disminución

Sigue de la primera plana

que hoy no es posible dejar de lado la reflexión sobre el punto exacto en donde se encuentra México en materia de desarrollo político después de haber sido testigos la semana pasada del dramático recuento que tuvieron los ciudadanos chilenos con las urnas. El plebiscito de ese país del Cono Sur fue un medio para dilucidar precisamente un asunto de legitimidad dentro de un sistema que había hecho todo lo posible por encontrar, sin lograrlo, una alternativa a la democracia política.

Antes de seguir adelante deseo dejar en claro que, para propósitos de la comparación que me propongo hacer, no pretendo hacer a un lado las grandes diferencias entre el autoritarismo que se estableció en Chile en septiembre de 1973 y el nuestro, el de más tradición en América Latina. El chileno es producto de un golpe reaccionario del ejército. Se trata de un sistema básicamente excluyente, militar y represivo, y abiertamente favorable a los intereses de una clase: la gran burguesía exportadora. El autoritarismo mexicano, por su parte, surgió de una revolución social, antidictatorial y antioligárquica. Tomó rápidamente la forma de un sistema que incluyó por la vía corporativa a representantes de todos los grupos sociales, y que retiró al ejército de la arena política. Finalmente, a diferencia de Chile, el sistema mexicano sólo ha usado de la represión y el terror como última instancia, siendo 1968 el ejemplo más conspicuo de esto último.

Ahora bien, pese a sus grandes diferencias, ambos sistemas, el mexicano y el chileno no son democráticos. Sin embargo, los dos debieron de enfrentar a su electorado casi al mismo tiempo y en condiciones no tan distintas que no permitan la comparación. El sistema mexicano tuvo que proceder a efectuar una elección presidencial porque así lo requería su estricto calendario sexenal. El chileno se fue al plebiscito porque así lo había establecido la Constitución impuesta por la dictadura con el fin de afianzar una legitimidad que decía tener pero que a todas luces era dudosa. En ambos casos, el gobierno mostró una gran confianza inicial en su capacidad de obtener el apoyo de la gran mayoría de los votantes, desdeñó a la oposición y, finalmente, se llevó una sorpresa mayúscula y desagradable.

como lo venían haciendo desde 1929.

Tanto en Chile como en México la oposición entró desunida en la arena de la lucha por el voto, y en ambos casos los recursos del erario público financiaron una gran campaña de propaganda oficial a la que las vacías bolsas de la oposición no pudieron, ni remotamente igualar. En ambos países, la televisión y los principales medios masivos de comunicación tanto públicos como privados estuvieron de principio a fin, controlados por los gobiernos y puestos al servicio de los respectivos candidatos oficiales. Sólo excepcionalmente el punto de vista de la oposición pudo ser comunicado directamente, sin intermediarios, al gran público. Pese a todo, en el momento crítico la oposición encontró la manera de unirse y compensar su pobreza material con una creación neta de poder y contralegitimidad: el comando por el No fue en Chile el FDN de México.

Sin embargo, y una vez cargados todos los dados en su favor, los generales chilenos decidieron que era preferible perder el plebiscito a ganarlo mediante el fraude, pues en el segundo caso el daño a la legitimidad de la institución militar —que es su verdadero objeto de protección y no Augusto Pinochet en lo personal— sería mayor que el que podría producir que un general perdiera la presidencia. Lo anterior se desprende claramente de unas declaraciones que a principios de año hizo a Alfred Stepan —un político estadounidense— el general Fernando Matthei, comandante de la fuerza aérea y publicadas en el New York Review of Books de junio pasado. El general Rodolfo Stange, comandante de los carabineros, y también según la fuente anterior, se pronunció por no cerrar el registro de electores temprano como lo deseaba Pinochet (cuando la mayoría de los registros aún pertenecían a las clases y grupos que favorecían la continuación de la dictadura), sino por prorrogarlo para dar tiempo a que se formara un padrón realmente representativo, que afianzara la legitimidad de la consulta. El resultado fue que el padrón más que se duplicó entre abril y septiembre. En México, en cambio, se actuó en el sentido inverso: se impidió el crecimiento del padrón.

★

La dictadura militar chilena confió en que podría ganar el plebiscito por tres razones: por haber logrado un crecimiento económico constante en los últimos tres o cuatro años, porque las reglas de la votación habían sido impuestas por los militares y hacían extraordinariamente difícil la acción de una oposición dividida, y por la desmovilización de las clases mayoritarias por el miedo que se había creado mediante el terror sistemático. En el caso mexicano, y desafortunadamente para el partido del Estado, no había ningún crecimiento económico, pero su optimismo económico se basó en la disminución un tanto artificial de la brutal inflación del año anterior. También hubo una ley electoral elaborada a la medida de las necesidades y deseos gubernamentales, y que le permitía un control absoluto sobre todo el proceso electoral a la vez que hacía terriblemente difícil la labor de la oposición. Finalmente, en México el papel del miedo fue secundario —aunque existió, y ahí sigue el asesinato sin castigo de Ovando y su ayudante— y su lugar lo tomó la confianza en que tanto la tradicional cultura política, el aparato corporativo y la inercia, llevarían a que las clases bajas se disciplinaran y votaran por el partido del Estado

En resumen, los generales chilenos permitieron la formación de un padrón muy completo, que la oposición estuviera representada en las 22,000 casillas —lo que no ocurrió en México— y que cada boleta electoral contara con un número único desprendible antes de introducirse en la urna transparente para limitar las posibilidades de fraude. Finalmente, y esto fue lo espectacular y que contrastó con lo ocurrido en México, el ministro de Gobernación, después de intentar retrasar el anuncio de los resultados admitió —aparentemente presionado por el general Matthei— la derrota del gobierno en las primeras horas de la madrugada del día siguiente de la votación.

Todo lo anterior ocurrió porque el grupo militar gobernante consideró que entre la pérdida del plebiscito o la sospecha del fraude, era preferible lo primero para tratar de salvar lo más posible de los intereses militares en el complicado —y quizá largo— proceso de transición del autoritarismo a la democracia.

La élite política mexicana, en cambio, tomó el camino opuesto, y prefirió cargar con la sospecha del fraude electoral, antes que poner en entredicho la mayoría absoluta del PRI, a la que supone base indispensable del presidencialismo. En mi opinión esa decisión fue un grave error, pues hace

de la Legitimidad

más difícil la deseable transición del autoritarismo a la democracia. Sin la legitimidad del pasado —esa legitimidad surgida y mantenida por el populismo del cual se abjura hoy por no haber recursos para mantenerlo— y sin la legitimidad electoral, la base de sostén del grupo gobernante mexicano es incierta e insegura. Esto, en momentos en que la legitimidad se necesita con urgencia para rehacer la economía dentro de un nuevo modelo neoliberal y para modernizar la política de manera que no se obligue a la oposición a caminar por senderos no pacíficos.

Le guste o no a nuestros dirigentes, es un hecho que el indicador central de la legitimidad de

un gobierno, es el apego a las fórmulas prestables para asumir el privilegio y responsabilidad de ejercer el poder. En el caso chileno la fórmula era el plebiscito y en el nuestro la elección democrática.

Arrojar sospecha sobre el respeto a la forma, como ocurrió en México, es herir en su centro vital a la legitimidad.

En fin, para concluir y ejemplificar el tipo de peligros que se corren cuando falla la legitimidad deseo referirme al increíble documento anticardenista que publicó en una plana pagada el 7 de octubre *The Wall Street Journal* (con un costo aproximado de 50 mil dólares). Como se sabe, un supuesto "Comité para el

mejoramiento de las relaciones México-USA" de Alexandria, Virginia (¿Lyndon la Rouché?) presentó una peculiar defensa de la legitimidad de Carlos Salinas (con esos apoyos, ¿quién necesita enemigos?) a la vez que lanzó un histérico grito de alerta contra el inminente inicio de una guerra civil en México provocada por un Cuauhtémoc Cárdenas golpista, comunista y manejado por Moscú.

Implicitamente, el desplegado invita al lector norteamericano de ese diario —es decir, al hombre de negocios— a apoyar a quienes en México son la defensa contra quienes ya están preparando una guerra civil (los cardenistas) para derrocar a un gobierno

legítimo. Tal guerra "que puede costar la vida a millones de gentes" colocaría a los rusos en la frontera con Estados Unidos a la vez que enviaría al norte del río Bravo a un ejército de 15 o 20 millones de refugiados mexicanos.

Es claro que por las heridas abiertas en las partes vitales del autoritarismo mexicano a raíz del mal manejo del proceso electoral de julio pasado, se pretenden colar ahora muchos, incluido el grupo de paranoicos políticos que pagó el costoso desplegado en favor del PRI en el diario neoyorquino. Es una muestra del alto costo que implica la falta de legitimidad, un costo que desgraciadamente se nos carga a todos, no sólo al PRI.